



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

RDP-553-16

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. CONSEJO SUPERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. MANAGUA, CUATRO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISÉIS, LA UNA Y CINCO MINUTOS DE LA TARDE.

VISTOS RESULTAS,

A las nueve y treinta minutos de la mañana del día veintidós de abril del año dos mil dieciséis, el Consejo Superior de este Ente Fiscalizador, en Sesión Ordinaria Número Novecientos Setenta y Siete (977), aprobó el Plan Anual de Verificaciones de Declaraciones Patrimoniales a ejecutarse en el año dos mil dieciséis, por parte de la Dirección de Probidad de la Dirección General Jurídica de este Ente Fiscalizador. Se emitió el correspondiente Informe Técnico con Código de referencia **DGJ-DP-001-(204)-07-2016** de fecha treinta de Julio del año dos mil dieciséis, relacionado con el proceso administrativo de Verificación de Veracidad de Declaración Patrimonial presentada ante este Órgano Superior de Control en fecha cinco de febrero del año dos mil quince por el Licenciado **LESTER MANUEL VALVERDE QUINTANA**, Responsable División III de la División Administrativa del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez (MIFAN). Que los objetivos del proceso administrativo consistieron en: 1) Comprobar si el contenido de la Declaración Patrimonial presentada por el Servidor Público, está acorde con lo establecido en la Ley Número 438, “Ley de Probidad de los Servidores Públicos” y 2) Determinar inconsistencias derivadas del proceso administrativo a cargo del Servidor Público, si los hubiere y que podrían establecer responsabilidad a su cargo. Que el alcance del proceso administrativo comprendió: A) Notificar mediante comunicación escrita el inicio del proceso administrativo de verificación de veracidad de la Declaración Patrimonial al Servidor Público, B) Elaborar fichaje o resumen de la Declaración Patrimonial del Servidor Público y analizar el contenido de la misma, a efectos de determinar omisiones y solicitar se subsanen si las hubiese, C) Solicitar información sobre los bienes muebles e inmuebles ante las instancias correspondientes, incluyendo a las Instituciones Financieras Nacionales, Públicas, Privadas o Mixtas, Aseguradoras y Reaseguradoras donde el Servidor Público tiene registrados los bienes que son de su propiedad, de su cónyuge o de sus hijos bajo autoridad parental, y D) Recibir de parte de las Entidades descritas en el literal c) la información sobre el registro de bienes muebles e inmuebles y cotejar con el contenido de la declaración rendida por el Servidor Público. Rolan las respectivas credenciales del trabajo de verificación debidamente notificada a las máximas autoridades de las siguientes entidades del Estado: 1) Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Managua; 2) Dirección General de la Policía Nacional de Tránsito y 3) Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, por ser estas las entidades encargadas del registro de bienes inmuebles y mercantil, registro vehicular y registro de cuentas bancarias. Refiere el precitado Informe que en el curso de la causa administrativa de verificación, como parte de las garantías del debido proceso en fecha veintiséis de abril del año dos mil dieciséis, se notificó mediante carta el inicio del proceso administrativo iniciado al Licenciado **LESTER MANUEL VALVERDE QUINTANA**, Responsable División III de la División Administrativa del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez (MIFAN). Que se solicitó a las entidades ya referidas nos remitieran la información relacionada con los bienes registrados a nombre del Licenciado **LESTER MANUEL VALVERDE QUINTANA**. En fecha veintitrés de mayo del año dos mil dieciséis, se recibió la información requerida de la Dirección General de la Policía Nacional de Tránsito. De igual manera, se recibió la información del Banco de la Producción (BANPRO). Con fecha dos de junio del año dos mil dieciséis, recibimos información suministrada por el Banco



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PROCREDIT. Con fecha diez del mismo mes y año, recibimos información suministrada por el Banco LA FISE BANCENTRO y el Banco de Finanzas (BDF), los días veintisiete y veintinueve de junio recibimos la información del Banco de América Central (BAC) y del Banco FICOHSA, respectivamente. El día treinta de junio recibimos información del Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil. De los resultados de las diligencias investigativas de verificaciones y con la información suministradas por las entidades descritas se identificaron algunas inconsistencias que difieren de la Declaración Probidad del caso de autos. Que como parte del debido proceso se procedió a notificar al Licenciado **LESTER MANUEL VALVERDE QUINTANA**, Responsable División III de la División Administrativa del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez (MIFAN), tal inconsistencias a efectos de justificarlas y para ello se le otorgó un plazo de quince días, más el término de la distancia, previniéndole que de no recibir sus aclaraciones podría devenir en Responsabilidad Administrativa a su cargo. En fecha veintisiete de julio del año dos mil dieciséis se recibieron las justificaciones que según el Licenciado **VALVERDE QUINTANA**, pretendió aclarar las inconsistencias debidamente notificadas. Por lo que habiéndose sustanciado con arreglo a derecho el presente proceso y no habiendo más procedimientos que realizar, ha llegado el caso de resolver; y

CONSIDERANDO

I

El artículo 130 párrafo segundo de la Constitución Política estatuye que “todo funcionario del Estado debe rendir cuenta de sus bienes antes de asumir su cargo y después de entregarlo. La ley regula esta materia”. Los artículos 7, literal e) y 12, literal a) de la Ley Número 438, “Ley de Probidad de los Servidores Públicos”, establecen como deber de todo Servidor Público presentar la Declaración Patrimonial y cualquier aclaración que de la misma solicite la Contraloría, conforme a lo establecido en la presente ley y constituye falta inherente a la probidad del Servidor Público no presentar la Declaración Patrimonial en tiempo y forma. Adicionalmente, el artículo 27 de la precita Ley de Probidad determina que la Contraloría puede efectuar los controles necesarios y solicitar al declarante las explicaciones y aclaraciones que considere pertinentes. Citadas las disposiciones legales que sirvieron de base para darle curso al proceso administrativo de verificación de probidad, se analizó el contenido de la Declaración Patrimonial presentada por el Licenciado **LESTER MANUEL VALVERDE QUINTANA**, y se determinó que dicho funcionario dijo: Poseer únicamente el vehículo Marca Toyota, Placas M223-737, sin embargo, del informe suministrado por la Dirección General de la Policía Nacional de Tránsito, se evidencia que dicho funcionario tiene inscrito el Vehículo Motocicleta Marca Yamaha, Placas N° M93487 con fecha de trámite treinta y uno de julio del año dos mil catorce.- Que tal inconsistencia, fue dada a conocer al Licenciado **LESTER MANUEL VALVERDE QUINTANA**, a efectos de que presentara sus alegatos, aclaraciones o ampliaciones que considerara necesaria, para el desvanecimiento, para lo cual se le otorgó el plazo de quince días. Que mediante comunicación recibida en fecha veintisiete de julio del año dos mil dieciséis el Licenciado **VALVERDE QUINTANA** alegó que efectivamente el vehículo está registrado a su nombre pero que no le pertenece, ya que él sólo prestó su nombre para el crédito y que involuntariamente se le fue por alto hacer mención de la misma en su Declaración de Probidad. Como consecuencia de lo anterior, el Licenciado **VALVERDE QUINTANA** no demostró documentalmente que no le pertenece, por lo que se toma como prueba que si les pertenece la Certificación emitida por la Dirección General de la Policía Nacional de Tránsito de conformidad a los Artos. 1117 y 1125 numeral 3), del Código de Procedimiento Civil vigente que establece: “**Los documentos expedidos por los funcionarios**



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

públicos que estén autorizados para ello, en lo que se refiera a los ejercicios de sus funciones”. Como consecuencia de lo anterior, en el presente caso, hay ocultamiento de la información relacionada a los bienes que posee el Licenciado **VALVERDE QUINTANA**, lo que trajo como consecuencia, la violación del artículo 131 de nuestra “Constitución Política”, sexto párrafo que en su parte in fine dice: **Los funcionarios y empleados públicos son personalmente responsables por la violación de la Constitución, por falta de probidad administrativa y por cualquier otro delito o falta cometida en el desempeño de sus funciones;**. Asimismo violó el artículo 12, inciso c de la Ley 438, “Ley de Probidad de los Servidores Públicos”, incurrió en una falta al **ocultar en la Declaración Patrimonial subsiguientes, bienes que se hubieren incorporados a su patrimonio, al de su cónyuge o acompañante en unión de hecho estable y de los hijos sujetos a patria potestad”**. Finalmente, incumplió, el Arto. 104 Numeral 1) de la Ley N° 681, “Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control de la Administración Pública y Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado”, que dispone que los Directores o Jefes de Unidades Administrativas, tienen como deber y atribución **cumplir y hacer cumplir las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, normas y demás disposiciones expedidas por la Contraloría General de la República o por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público**, y el artículo 38 Numeral 1) de la Ley N° 476, “Ley del Servicio Civil y la Carrera Administrativa”, que establece que todo Servidor Público debe **respetar y cumplir con lealtad la Constitución Política, la presente Ley y su Reglamento y otras leyes relativas al ejercicio de la función pública, así como las obligaciones inherentes a su puesto**, razón por la cual, deberá establecerse responsabilidad Administrativa a su cargo.

POR TANTO:

Con los antecedentes señalados y de conformidad con los con los artículos 73 y 77 de la Ley Número 681, “Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control de la Administración Pública y Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado”, 4, 13 y 14 de la Ley Número 438, “Ley de Probidad de los Servidores Públicos”, los suscritos Miembros del Consejo Superior, en uso de las facultades que la Ley es confiere,

PRIMERO: Ha lugar a establecer como en efecto se establece, **Responsabilidad Administrativa** a cargo del Licenciado **LESTER MANUEL VALVERDE QUINTANA**, Responsable División III de la División Administrativa del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez (MIFAN), por incumplir los Arto. 131 de la Constitución Política de Nicaragua, Arto. 12 inciso c) de la Ley 438 “Ley de Probidad de los Servidores Públicos”; 104 numeral 1) de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control de la Administración Pública y Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado y 38 numeral 1) de la Ley del Servicio Civil y la Carrera Administrativa.

SEGUNDO: Por lo que hace a la **Responsabilidad Administrativa** aquí determinada, este Consejo Superior sobre la base de los artos. 78, 79 y 80 de nuestra Ley Orgánica, impone al Licenciado **LESTER MANUEL VALVERDE QUINTANA**, como Sanción Administrativa, **Multa de Un (1) mes de salario**, que deberá ejecutarse y deducirse a favor del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez por el titular de dicho ministerio, conforme lo dispuesto en los artículos 83 y 87, numeral 2) de la Ley Orgánica de la Contraloría, según proceda. Del cobro efectivo de las multas



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

se informará a esta Autoridad en el plazo de treinta (30) días, como lo dispone el artículo 79 de la referida Ley Orgánica.

TERCERA: Se previene al afectado del derecho que le asiste de recurrir de revisión ante este Consejo Superior en el término de ley, conforme el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Contraloría.

Esta Resolución Administrativa está escrita en **cuatro** hojas de papel bond con membrete de la Contraloría General de la República y fue votada y aprobada por unanimidad de votos en Sesión **Número Mil Seis (1,006)** de las nueve y treinta minutos de la mañana del día **Viernes CUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS**, por los suscritos Miembros del Consejo Superior de la Contraloría General de la República.- Cópiese, notifíquese y publíquese.-

Lic. Luis Ángel Montenegro E.
Presidente del Consejo Superior

Dra. María José Mejía García
Vicepresidenta del Consejo Superior

Lic. Marisol Castillo Bellido
Miembro Propietaria del Consejo Superior

Lic. María Dolores Alemán Cardenal
Miembro Propietaria del Consejo Superior

Dr. Vicente Chávez Fajardo
Miembro Propietario del Consejo Superior

SON/JCSA/LV/LARJ

Expediente (204)